
Lewis Taylor

LA ESTRATEGIA CONTRAINSURGENTE, EL PCP-SL Y LA GUERRA CIVIL EN EL PERÚ, 1980-1996

La guerrilla entre el pueblo es como un pez en un río el río puede vivir por sí mismo no así el pez

MAXIMA CHINA

Las dos únicas posesiones necesarias y duraderas son cerebro y pies Son totalmente humanas El lado que tiene los pies en la tierra en el momento preciso y en el lugar correcto es el que ganará

ROBERT THOMPSON DEFEATING COMMUNIST INSURGENCY

¿Guerra con aspectos económicos y sociales? Cojudeces Que vaya la tropa y que meta bala A ver si no se aquieta la indiada Se montó entonces un aparato para matar una estrategia de asombrosa simplicidad ¿quien mata más? ¿ellos o nosotros?

GUILLERMO THORNDIKE LA REVOLUCIÓN IMPOSIBLE

Aunque una serie de monografías tienen el dudoso mérito de haber encontrado recientemente el camino para ser publicadas y todavía existen importantes brechas en nuestro conocimiento, en los dieciséis años que han transcurrido desde que el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) se lanzó a la lucha armada el 17 de mayo de 1980 con la simbólica quema de urnas electorales en la localidad ayacuchana de Chuschi, la calidad de las publicaciones sobre la insurrección todavía continúa sin mejorar. Se han producido estudios bien informados sobre los orígenes y el temprano crecimiento del PCP-SL, su ideología, estrategia y las cambiantes relaciones campesino-guerrilla-militares en escenarios del conflicto tan diversos como Andahuaylas, el valle del río Huallaga, Puno y Junín¹

1 Para detalles sobre recientes documentos del PCP-SL, ver STARN, Orin «Sendero, soldados y ronderos en el Mantaro» *Quehacer* n° 74 Lima DESCO, 1992, pp 60-68, y, del mismo autor «Maoism in the Andes The Communist Party of Peru-Shining Path and the Refusal of History» *Journal of Latin American Studies* 27 (2), 1995, pp 399-421

Dentro de este panorama ampliamente positivo, sin embargo, una faceta importante de la guerra civil no ha sido objeto de investigación y análisis: la campaña contrainsurgente librada por el Estado peruano. Es comprensible una relativa negligencia sobre este punto, ya que la atención natural se enfoca en lo que para muchos es una organización insurgente clandestina, perpleja e irracional. La negativa de los comentaristas a examinar la dimensión contrainsurgente de la guerra civil también es comprensible entre aquéllos que se ubican en la izquierda política, tienen puntos de vista antimilitaristas y vienen de países cuyas Fuerzas Armadas muestran una larga historia de exterminar gente en territorio extranjero.

Por último, pero no por ello menos importante, para los que viven en el Perú esto representa un peligroso tema de ser tratado, dado que involucra la investigación de asuntos controvertidos y delicados que individuos insensibles preferirían que se mantengan ignorados.

Aun así, la manera en que el Estado peruano ha conducido su campaña para derrotar al PCP-SL ha tenido un impacto crucial en la trayectoria de la guerra civil, y es, por lo tanto, una dimensión del conflicto que merece una mayor atención.

Así, el objetivo del presente artículo es determinar la eficiencia de los esfuerzos del Estado peruano en su lucha contra el PCP-SL. La discusión está organizada alrededor del trabajo de un experto en contrainsurgencia, Robert Thompson, quizá el personaje internacional más respetado del oscuro mundo de los profesionales de la contrainsurgencia durante la segunda mitad del siglo XX. Los escritos de Thompson han tenido gran influencia en círculos militares desde los años sesenta, y se han aplicado estrategias basadas en sus ideas con diversos resultados, desde Armagh hasta Zimbabue. Además del interrogante sobre su aplicabilidad e interés general, los argumentos de Thompson son de particular relevancia, dado el gran número de personal militar de alto rango del Perú que ha recibido entrenamiento especializado en el Reino Unido y dado, asimismo, que durante la década pasada varias misiones de expertos británicos en contrainsurgencia han sido formados bajo las formulaciones de Thompson.

EL MODELO CONTRAINSURGENTE DE THOMPSON

Incorporando algunas lecciones sobre guerra no convencional adquiridas a través de su involucramiento en operaciones de Chindit contra los japoneses en Birmania luego de la II Guerra Mundial, Thompson fue destacado a Malasia durante la «Emergencia», donde desde 1948 a 1960 desempeñó un papel relevante en la campaña británica para aplastar la insurrección liderada por el Partido Comunista de Malasia. Gozando de una gran reputación, entre 1961 y 1965 Thompson encabezó la misión de asesores británicos en Vietnam del Sur, donde, si bien fue muy crítico acerca de importantes aspectos de la estrategia militar seguida por los survietnamitas y las Fuerzas Armadas estadounidenses, se convirtió en un —algunos dicen *el*—

asesor predilecto de Richard Nixon y Henry Kissinger En 1966, con base en su considerable conocimiento, Thompson decidió escribir un libro sobre «la teoría básica de la contrainsurgencia», en el cual expuso los principios generales sobre cómo conducir este tipo de guerra irregular²

Thompson inicia el libro formulando dos preguntas que ordenan la discusión en todo el texto

«¿Como sobreviven las fuerzas de la guerrilla comunista, y hasta amenazan con derrotar a fuerzas convencionales de gran escala apoyadas por países cuyo poder, riqueza y buenas intenciones parecen invencibles? Y, sobre todo, ¿como pueden ser derrotadas sin un enorme costo en hombres, dinero, material y tiempo, y sin el riesgo de una guerra generalizada?» (1966 13)

Al responder a la primera pregunta, Thompson se guía por los textos de Mao, Vo Nguyen Giap y su propia experiencia, para señalar que los insurgentes pueden ganar base social enarbolando las demandas locales, «tales como tierra para los desposeídos, explotación laboral en las haciendas y minas, autonomía regional para las minorías étnicas e igualdad política para los inmigrantes», también pueden ganar adeptos como resultado de la intervención en conflictos que ocurren en comunidades campesinas, el rechazo popular a la corrupción gubernamental, la desconfianza en los políticos que no cumplen con sus promesas y el exceso de impuestos que debe pagar la población rural (1966 21-23) El descontento sobre estos puntos puede atraerles simpatizantes de diferentes sectores de la población, pero los llamados a un cambio radical llegan particularmente a la juventud de las zonas rurales que

« No estaba preparada para aceptar la existencia monotonía de la vida en una comunidad rural, donde lo más que podía esperar es heredar de su padre una pequeña parcela El deseo de escapar de la rutina estaba relacionado con el deseo de una mejor educación, para así poder tener un lugar en una comunidad moderna y desarrollada» (1966 23)³

2 THOMPSON, Robert *Defeating Communist Insurgency* Londres Chatto & Windus 1966 p 1x Posteriores publicaciones sobre el tema no se desvían significativamente de los argumentos presentados en su texto clásico Hay que comparar, por ejemplo el resumen de las ideas de Thompson presentadas en las siguientes páginas con el llamado «nuevo paradigma» de Manwaring sobre contrainsurgencia Manwaring sostiene que el lanzamiento de una campaña guerrillera se decide por (i) el nivel de legitimidad del gobierno, (ii) cual adversario está mejor organizado y más unido, (iii) el grado de apoyo que tiene el gobierno tanto interna como externamente (iv) su capacidad para cortar el flujo de ayuda externa hacia los insurgentes, (v) la eficiencia del aparato de inteligencia del gobierno, y, (vi) la efectividad de las Fuerzas Armadas (Ver MANWARING, M «Peru's Sendero Luminoso The Shining Path Beckons» *Annals of American Academy* n° 41, 1995, pp 157-166, y MANWARING, M y J FISHEL «Insurgency and Counterinsurgency Toward a New Analytical Approach» *Small Wars & Insurgencies* 3 (3), 1992, pp 272-310)

3 Según el momento, Thompson asumió que estas actitudes afectan principalmente a campesinos hombres

Según Thompson, una vez que se obtenía el apoyo necesario en las áreas rurales, los insurgentes intentaban provocar el colapso administrativo y expulsar a los representantes del Estado de las localidades, con el doble objetivo de debilitar el control gubernamental sobre el campesinado y tener un espacio relativamente seguro en el campo. Para facilitar esto, los rebeldes comenzaban una campaña de asesinatos selectivos que se proponían eliminar oponentes potenciales e intimidar a la gente para que dé su apoyo a los subversivos, a los que la Policía encuentra difícil de contener. Para mantener su impulso, los rebeldes comenzaron a atacar puestos policiales aislados y otros objetivos a la mano, con la esperanza de capturar armas y explosivos. También se involucraban en la destrucción de infraestructura, para así obstaculizar las incursiones militares a las zonas donde tenían sus bases y reforzar el control guerrillero sobre los habitantes (1966 24-29).

Debido a que la guerrilla es un escurriridizo «pez en el agua», las consecuentes operaciones de «despejar y buscar» realizadas por el Ejército mostraron ser totalmente inefectivas y derivaron en un «reclutamiento impulsivo» como resultado de los múltiples abusos cometidos por los soldados. Esto distanció a los campesinos y, en consecuencia, a pesar de sufrir algunas pérdidas en escaramuzas sin importancia, el fortalecimiento tanto político como militar se incrementó —un desarrollo cuyas implicaciones no se pierden en la población y podrían causar una baja de la moral entre las fuerzas gubernamentales (1966 31-34)⁴. Si este escenario no se revierte, la actividad insurgente se expandirá gradualmente al punto donde la guerra de guerrillas se transformará en una guerra de movimientos, en la que los rebeldes tienen la capacidad de controlar grandes áreas, cuentan con un gran número de combatientes y enfrentan al Ejército en batallas cada vez más convencionales.

Para Thompson, la invisibilidad de la guerrilla hace extremadamente difícil para la Policía o un gran ejército compuesto principalmente por conscriptos derrotar este tipo de insurgencia. Fuera de carecer de la necesaria experiencia militar para conducir una guerra no convencional, tal ejército provoca inestabilidad política y reduce la efectividad en la toma de decisiones políticas debido a que los ministros deben dedicar mucho de su «tiempo y energía en manipular a los comandantes militares», mientras que generales eficientes pero políticamente inconvenientes son con frecuencia retirados en favor de aquéllos cuya principal cualidad es su actitud servil hacia el presidente (1966 59). Además de crear una «mentalidad guerrillista» dentro de la oficialidad, el costo de mantener un elevado número de tropas también traería problemas económicos a los países pobres del tercer mundo. Las Fuerzas Armadas tienden a consumir una gran parte del presu-

4 Thompson estableció «Vestido como campesino, es imposible distinguir al guerrillero del resto de la población excepto cuando carga un arma. Además, puede ser campesino durante el día y guerrillero en la noche» (1966 34).

puesto, con lo cual dejan poco dinero para las inversiones en infraestructura y bienestar social que beneficien a la población civil. Otro efecto negativo producido por el mantenimiento de un enorme y costoso ejército, es que muchos personajes talentosos no hacen carrera en el aparato del Estado porque tienen mejores perspectivas en las Fuerzas Armadas.

Finalmente, en la esfera militar un ejército convencional parece inapropiado para combatir a la guerrilla en cinco puntos: (i) lógicamente, «se involucra en operaciones de tipo convencional aunque éstas no sean convenientes», (ii) el personal clave es cambiado regularmente, lo cual estimula a los comandantes «a hacerse famosos con victorias militares rápidas y espectaculares», cuando lo que se necesita es involucrar a los insurgentes en un paciente juego de ajedrez, (iii) hay una tendencia entre los oficiales jóvenes a no tomar iniciativas si no hay órdenes escritas, aunque para alcanzar éxito en ese tipo de conflicto se necesita tener la capacidad de tomar decisiones inteligentes sobre la marcha, (iv) se producen «constantes problemas sobre el control de operaciones y de inteligencia», y (v) con un ejército de conscriptos es usual utilizar armas convencionales que «no son adecuadas para operaciones antiguerrilleras», pero que terminan «cayendo en manos insurgentes», que las utilizan con efectividad contra las tropas gubernamentales (1966 59-62).

Por estas razones, Thompson considera que el conocimiento convencional, que establece que el gobierno no puede ganar una guerra de guerrillas a menos que tenga una proporción de tropas de por lo menos diez a uno a su favor, «no tiene sentido». En vez de cantidad, se requiere calidad, en la forma de

« un ejército pequeño, de elite, altamente disciplinado, ligeramente equipado y agresivo, con el apoyo de una Marina y una Aviación suficientemente capaces para hacer que el Ejército sea adecuadamente móvil» (1966 62, 105, 199-120)

Esta fuerza debería estar conformada por voluntarios muy bien entrenados, con una Infantería de un máximo de diez años de antigüedad para asegurar que el personal tenga un alto nivel de preparación física, al mismo tiempo, los soldados deben recibir su pago regularmente y tener una adecuada pensión de retiro con el objetivo de mantener un óptimo espíritu de cuerpo. Estas tropas necesitan ser capaces de llevar a cabo operaciones de penetración profunda a largo plazo, particularmente en la sierra y la selva, un estilo de lucha que sin duda era familiar para Thompson a través de las tácticas militares heterodoxas adoptadas por el excéntrico brigadier Orde Wingate contra los japoneses en la selva de Birmania⁵.

Thompson considera que bajo circunstancias ideales esta fuerza debería ser activada rápidamente para dismantelar una organización subversiva

5 Sobre esto, ver SYKES, C. *Orde Wingate* Londres Collins 1959, también, FERGUSON, B. *Beyond the Chindwin* Londres Collins 1962.

en la «fase de construcción» (es decir, cuando se planea la insurrección), pero si esto no es posible, «entonces el movimiento debe ser derrotado lo más pronto posible durante la fase guerrillera» (1966 50)

Habiendo detallado lo que él considera debe ser el tipo de fuerza que mejor se adapta para librar una campaña antiguerrillera, Thompson procede a señalar «los cinco principios básicos» a seguir para que el operativo tenga un desenlace exitoso. Aunque él es consciente de que las estrategias contrainsurgentes deben ser adaptadas a las peculiaridades de cada situación, estas cinco políticas esenciales apuntalan cualquier respuesta efectiva oficial a la subversión.

Primero, un gobierno necesita un compromiso de largo plazo para mantener un país libre y unido, «política y económicamente estable y viable», con una «maquinaria gubernamental razonablemente eficiente» y no corrupta, bien capacitada y capaz de imponer su «autoridad y ley y orden en todo el país, que pueda recuperar el control de la población y ganarse su apoyo» (1966 50-52). En otras palabras, la confusión política y la extendida corrupción oficial que caracterizó el gobierno de Chiang Kai-shek en China en los años treinta y cuarenta, o el de Vietnam del Sur en los sesenta, deben ser evitadas a toda costa. Sin este prerrequisito no militar, los programas de desarrollo económico y las políticas contrainsurgentes no podrán ser implementadas de manera efectiva.

En segundo lugar, es absolutamente necesario que las Fuerzas Armadas operen dentro de la ley. A pesar de la «fuerte tentación» de los militares a actuar ilegalmente, Thompson postula que tal conducta no es sólo

«moralmente incorrecta, (sino que) en más de un periodo creará más dificultades prácticas al gobierno que las que puede resolver. Juicios privados, leyes marciales y tribunales militares nunca pueden ser justificados satisfactoriamente. Son en sí mismos una aceptación tácita de que el gobierno responsable ha colapsado. En el largo plazo, el acatar la ley es un gran avance para el gobierno. Ayuda a que todos los oficiales y funcionarios civiles sean responsables de sus actos. Esto pone la tortura y la ejecución extrajudicial de terroristas capturados en su correcto lugar, aunque favorece la provocación, ambos son crímenes y la última es asesinato. Si el gobierno no acata la ley, entonces pierde el respeto y no cumple con sus obligaciones contractuales con el pueblo» (1966 54).

Los permanentes abusos contra los derechos humanos, por lo tanto, son considerados contraproducentes. Las leyes pueden ser duras, pero deben ser «aplicadas a todos por igual», evitándose las detenciones arbitrarias y llevando a juicio a los militares responsables de esos abusos —debe verse que se hace justicia.

El tercer principio también cae dentro de la esfera administrativa y política: es necesario que el gobierno tenga un plan general que incluya «medidas políticas, sociales, económicas, administrativas, policiales, y otras, que tengan relación con la insurgencia» (1966 55). Las iniciativas de desarrollo social y económico deberían adaptarse y reforzar las operaciones militares para retener o recuperar el apoyo de la población civil en una zona particular.

Cuarto, el gobierno deberá concentrar sus esfuerzos contrainsurgentes en el desmantelamiento de las estructuras políticas rebeldes en el campo y la ciudad, siendo las bandas de guerrilleros armados un objetivo secundario. Por esta razón, la creación de una organización de inteligencia eficiente capaz de penetrar el aparato subversivo «es de suma importancia» (1966 55-56, 84-85)

Una instancia a la que se le ha encomendado determinada tarea debe lograr la máxima efectividad operativa, debido a que esto evita la costosa duplicación de recursos, facilita la creación de un adecuado sistema de control sobre los informantes y previene la aparición de celos entre las distintas dependencias que puede resultar en la retención de información «de una a otra para explotarla y obtener créditos para sí mismos» (1966 84-85). Según Thompson, la ubicación más apropiada para esta organización de inteligencia unificada es una sección dentro de la fuerza policial, debido a que la Policía tiene presencia en todo el país y está más en contacto con los ciudadanos comunes que el Ejército. Esta unidad debería tener como objetivo los puntos de contacto entre los cuadros políticos que viven dentro de la localidad y «las unidades guerrilleras fuera de la población», para «lograr infiltrarse tanto en la organización subversiva como en las unidades guerrilleras» (1966 86)⁶. Las recompensas en dinero ofrecidas a los informantes y la promesa de un mejor trato a los insurgentes capturados o rendidos también llevan a obtener un creciente flujo de información. Esto permite al gobierno comenzar a ganar la guerra, y, por lo tanto, poner en marcha una tendencia que se mueve por su propio impulso: la población está más dispuesta a cooperar con las autoridades, el «nivel de contacto» con el ejército guerrillero crece, más guerrilleros son capturados muertos o deciden entregarse. Tal escenario deriva eventualmente en la derrota de la organización subversiva⁷.

El quinto principio de la estrategia contrainsurgente de Thompson establece que una vez que una rebelión ha sido derrotada, el gobierno debería asegurar primero sus propias bases, priorizando aquellas zonas del país que

6 Para una descripción interesante del método militar en este aspecto, ver KITSON, F. *Low Intensity Operations Subversion Insurgency and Peacekeeping*. Londres: Faber & Faber, 1991. pp. 102-126. Luego de su involucramiento en actividades contrainsurgentes en Kenia, Malasia, Oman y Chipre, Kitson fue una figura clave en la planificación de la campaña del Ejército británico en el Ulster durante los setenta.

7 Thompson presenta este argumento como sigue: «Salgamos y matemos algunos vietcong luego nos preocuparemos del trabajo de inteligencia. Esta cita de un general recién llegado confirma un antiguo dicho según el cual hay sólo dos tipos de generales en la contrainsurgencia: aquéllos que no han aprendido y los que nunca aprenderán. Afortunadamente, hay algunas excepciones. Un buen trabajo de inteligencia lleva a contactos más frecuentes y más rápidos. Más contactos llevan a más muertes. Esto a su vez genera una mayor confianza en la población, resultando en un mejor trabajo de inteligencia, más contactos y más muertes. Eso, general, es por lo que debería preocuparse primero en el trabajo de inteligencia» (1966 84, 89).

tienen la mayor concentración de población y son estratégicas en términos de importancia económica y comunicaciones, aunque esto podría significar el abandono temporal de las áreas rurales. Una vez que se ha impuesto el control en estas zonas claves a través de operaciones de «limpiar y ocupar», entonces la autoridad gubernamental puede expandirse «trabajando metódicamente fuera de ellas», en un estilo lento pero cuidadoso.

Los puntos tres, cuatro y cinco del esquema de Thompson deberán ser implementados a través de un programa de aldeas estratégicas dirigido a separar el pez del agua, permitiendo tomar acciones efectivas contra las fuerzas guerrilleras en las montañas. Se necesita seguir ciertas reglas básicas para que el programa de creación de aldeas pueda ser puesto en marcha con éxito: (i) no deberán ser instaladas demasiado rápido o de una manera no planificada (como ocurrió en Vietnam), pero deben establecerse gradualmente de acuerdo con un plan preestablecido que concentre las aldeas en un «bloque sólido» que les permita apoyarse unas a otras y, eventualmente, rechazar al enemigo, (ii) la política debe ser diseñada para reducir al mínimo el número de campesinos que deben ser trasladados y evitar la consecuente interrupción de la actividad agrícola, (iii) las Fuerzas Armadas y la Policía deberían proporcionar efectiva protección de las fuerzas insurgentes, prerequisite indispensable si el gobierno quiere ganarse a la población proporcionando ayuda para el desarrollo (servicios de salud y educación, materiales de construcción, electricidad, agua potable, etcétera), y, (iv) la organización insurgente clandestina dentro de la aldea debe ser «eliminada» (1966 124-140).

Es preciso que estas políticas estén acompañadas de restricciones en el movimiento de la gente y el abastecimiento, la aplicación de un censo que detalle los ocupantes de cada casa, tarjetas de identidad para cada persona mayor de 12 años, toques de queda y medidas de similar dureza que demuestren a los campesinos que el gobierno está decidido a ganar. Tal conducta, postula Thompson, tiene el beneficio de presentar a la población rural una importante opción.

«Debe haber en la totalidad del planteamiento del gobierno una habil y sensata mezcla de simpatía e insensibilidad. ¿Dónde está la línea divisoria? En el punto en el que el gobierno está en la posición de dar al campesino la clara opción entre apoyar al gobierno o apoyar a los insurgentes. En otras palabras, cuando el gobierno ingresa en una zona, la satura, construye aldeas estratégicas, organiza su defensa, proporciona beneficios sociales e impone medidas que dan a los campesinos una excusa para no apoyar a los insurgentes, entonces los campesinos tienen una opción, y el gobierno debe exigirles una decisión. Sin embargo, cuando una zona está fuera del control gubernamental y los campesinos están a merced de los insurgentes, entonces no tienen opción, y el gobierno no tiene derecho a ser duro. En Vietnam hubo la tendencia a hacer esto, pero en la dirección equivocada» (1966 146-147).

Respecto a la pregunta si los milicianos deben o no estar armados, Thompson considera que cada caso debería ser evaluado de acuerdo con sus méritos y no tener en cuenta políticas generales tales como armar a un

porcentaje fijo de adultos. En vez de eso, donde la población es «confiable y creíble, entonces el número de personas armadas debe ser el suficiente como para defender la aldea», pero «no debe haber medidas intermedias donde la gente es relativamente confiable. Eso sólo llevaría a la traición y al desastre» (1966: 171). En esto, como en otros asuntos, el gobierno debe ser paciente, tener «los pies en el suelo», evitar «atajos y artimañas», adoptar «planteamientos persistentemente metódicos» y aplicar «una presión permanente que lleve al deterioro gradual de la insurgencia».

A partir de este resumen de los principales argumentos de Thompson, el lector intuitivo habrá presupuesto que el libro fue escrito en un estilo ascético e imparcial que deja fuera conscientemente cualquier sentimiento de brutalidad y caos de la guerra civil. Igualmente, cualquiera remotamente familiarizado con la trayectoria del conflicto en el Perú desde 1980 habrá percibido un número significativo de vínculos entre los sucesos ocurridos en la práctica y las formulaciones de Thompson. Es sobre esto último que volveremos.

ESTABLECIENDO LOS FUNDAMENTOS DE LA «GUERRA POPULAR PROLONGADA», 1977-1982

Sin querer ser simplista, la guerra civil que afectó a la sociedad peruana puede ser dividida en tres fases. La primera va desde fines de los setenta hasta diciembre de 1982, cuando el Ejército peruano fue llamado para sofocar la insurgencia. El desarrollo del conflicto en esos años muestra una extraña semejanza con las primeras etapas del modelo hipotético de insurgencia reseñado por Thompson. Habiendo montado entre 1977 y 1980 una organización política clandestina y su brazo militar de apoyo considerado adecuado para la tarea, la dirigencia del PCP-SL lanzó su insurrección con actos de sabotaje contra objetivos económicos. A éstos siguieron asaltos armados en puestos policiales aislados. Estas acciones fueron acompañadas con una campaña de amenazas y asesinatos contra representantes del gobierno y de la pequeña burguesía ayacuchana (medianos terratenientes, campesinos acomodados, comerciantes, etcétera). En palabras de Abimael Guzmán, el objetivo era «batir el campo», que significaba

«Limpiar el campo, incendiarlo, no dejar autoridad política ni del gamonalismo, barrer con todas las autoridades, que el campo sea desbandado y que se limpie el terreno sobre el cual se desplazará y se construirán las bases de apoyo revolucionarias»⁸

En resumen, el PCP-SL intentaba crear un vacío político en las zonas donde era activo, que permitiría al partido ganar una mayor influencia en-

8 Extracto del discurso de Guzmán en la II Conferencia Nacional del PCP-SL, 1982. Citado en «Las conferencias senderistas» *Quehacer* n° 30, 1984, p. 20.

tre el campesinado, reclutar cuadros políticos (establecer «bases de apoyo») e incrementar el número de combatientes del Ejército Guerrillero Popular (EGP)

Tal como se predijo en el modelo de Thompson, la Guardia Civil mostró ser incapaz de responder a esos ataques sus alejadas bases fueron tomadas por combatientes del PCP-SL, la Policía fue obligada a ceder terreno y replegarse a las ciudades desde donde montaron inefectivas patrullas diurnas. Estos avances fueron importantes para el PCP-SL y la subsecuente trayectoria de todo el conflicto en diversos aspectos

Primero, aunque el PCP-SL estaba en una posición militar muy débil, a través de estas exitosas acciones logró adquirir armamento moderno y experiencia vital en el combate, y se forjó un confiable espíritu de cuerpo entre sus filas. Segundo, el repliegue del Estado entre 1980 y 1982 permitió a los insurgentes establecer algo parecido a «zonas liberadas» en Ayacucho y alrededores, que le dio a la organización oportunidad para expandir su base política. Aunque algunos de los comunicados del PCP-SL se encontraron con una resistencia pasiva (particularmente el intento de imponer una economía de subsistencia entre el campesinado como parte de la estrategia de rodear y matar de hambre a las ciudades), otras políticas ganaron cierto apoyo popular, tales como sanciones directas a los abigeos, ladronzuelos, a los que maltratan a sus esposas, comerciantes inescrupulosos y otros elementos «antisociales»⁹. Tal como sugirió Thompson, la guerrilla atrajo a jóvenes del campo, muchos de los cuales habían recibido educación superior en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y tenían poca esperanza de lograr sus aspiraciones dentro de la cada vez más profunda crisis económica que estaba empobreciendo a grandes sectores de la población. La dimensión educativa fue también importante en otro aspecto: un gran número de cuadros medios del PCP-SL eran maestros rurales. Las desatinadas y sangrientas operaciones de los *sinchis*, unidades especiales de la Policía supuestamente entrenadas para campañas contrainsurgentes que estuvieron en Ayacucho entre fines de 1980 y 1981, intensificaron los sentimientos antigubernamentales y proguerrilla. En vez de ganar «los corazones y las mentes» de la población, los brutales operativos de los *sinchis* de «despejar y buscar» (para usar una frase de Thompson) estimularon el «reclutamiento impulsivo» hacia el PCP-SL. El resultado fue que en diciembre de 1982 la organización insurgente había logrado consolidarse a tal punto que sorprendía a la mayoría de los analistas y probablemente también a la propia dirigencia del partido.

9 La mejor información sobre este asunto está en GORRITI, Gustavo *Sendero Historia de la guerra milenaria en el Perú*. Lima: Editorial Apoyo, 1991, pp. 77-93. Ver también ISBELL, B. J. «Shining Path and Peasant Responses in Rural Ayacucho», en D. S. Palmer, editor *Shining Path of Peru*. Londres: Hurst & Company, 1992, pp. 59-81, y BERG, R. «Peasant Responses to Shining Path in Andahuaylas», en D. S. Palmer, editor *Shining Path of Peru*. *ob. cit.*, pp. 83-104.

Esto fue, en parte, el resultado de una cuidadosa preparación e inteligente toma de decisión del «Presidente Gonzalo» y sus camaradas. La capacidad del PCP-SL no sólo para sobrevivir, sino también para expandir su área de operación y el grado de sus acciones durante estos años, se debió, sin embargo, en buena medida, a importantes yerros del Estado peruano.

Según Thompson, para responder efectivamente a una rebelión armada, las autoridades deben moverse rápida y astutamente para penetrar y neutralizar la estructura política subversiva, debido a que una vez que la guerrilla toma impulso, las organizaciones insurgentes son cada vez más difíciles de derrotar. Sin embargo, en el Perú de fines de los setenta y principios de los ochenta, una concatenación de factores políticos aseguró que la respuesta del Estado peruano a la amenaza que significaba el PCP-SL fuera diametralmente opuesta a lo descrito por Thompson.

Aunque los informantes del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) habían detectado desde 1977 en adelante (aunque en una forma confusa) que la campaña guerrillera se venía preparando en Ayacucho, la información no fue priorizada por sus superiores, quienes en ese entonces estaban más preocupados en dar seguimiento a las actividades de las principales organizaciones de izquierda que encabezaban los grandes paros nacionales y movilizaciones sindicales. También el alto mando militar, gastando todas sus energías en supervisar el proceso de transición al gobierno elegido, puso poca atención en lo que erróneamente consideraba sólo más palabrerías acerca de la «lucha armada» en círculos estudiantiles¹⁰.

Para agravar este error, una vez en el gobierno el presidente Fernando Belaúnde y sus ministros entendieron que la rebelión del PCP-SL era una repetición del movimiento guerrillero foquista de los años sesenta. El despidado mandatario calificó a los insurgentes de «bandidos» y ordenó a la Policía hacerse cargo de ellos. No obstante, en los primeros seis meses de la insurrección el gobierno saliente del general Francisco Morales Bermúdez y la administración entrante de Belaúnde cometieron lo que Thompson considera un error garrafal: subestimar al oponente. Se perdió una oportunidad para golpear seriamente al PCP-SL cuando la organización era más vulnerable¹¹.

En gran medida, esto fue resultado de dos importantes deficiencias en el aparato de inteligencia que para Thompson deben ser evitadas a toda

10 TAYLOR, L. *Maosism in the Andes. Sendero Luminoso and the Contemporary Guerrilla Movement in Peru*. Working Paper n° 2. Centre for Latin American Studies, University of Liverpool, 1983, pp. 35-36; GORRITI, G. *Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú* ob. cit., pp. 80-93. Ver también MONTESINOS, Vladimiro. «El Sistema de Inteligencia Nacional y la subversión en el Perú» (*Expresso* Suplemento Especial, 7 de junio de 1994, pp. 16-17). Montesinos es el principal asesor de seguridad de Fujimori y figura clave en el SIN.

11 Sobre estos puntos ver la entrevista al ex presidente Francisco Morales Bermúdez en *Caretas* n° 815 (3 de setiembre de 1984) pp. 26-28.

costa. Primero, el sistema de control interno y la evaluación fueron inadecuados. Segundo, cada arma –Ejército, Marina, Aviación y las diversas ramas de la Policía– tenía su propia unidad de inteligencia que competían ferozmente unas con otras y retenían información de sus instituciones rivales. Este problema se debió principalmente a la transición política: el gobierno militar se llevó muchos archivos cuando abandonó el Ministerio del Interior, dejando a la nueva administración civil con un grave «déficit en inteligencia» frente al PCP-SL¹²

Además de la ignorancia sobre lo que se preparaba, la muda respuesta de Belaúnde al «inicio de la lucha armada» del PCP-SL fue también producto del cálculo político. El presidente que había sido derrocado por el golpe militar encabezado por el general Juan Velasco Alvarado en octubre de 1968, regresó al cargo en julio de 1980 en medio de rumores de que generales velasquistas, como Rafael Hoyos Rubio, se sentían desplazados con los resultados de las elecciones de mayo de 1980 y estaban esperando la oportunidad propicia para embarcar nuevamente a Belaúnde en un avión a Miami. Belaúnde también era consciente de que luego de haber asignado a los militares la campaña antiguerrillera de 1965, cediendo el poder a los generales en zonas de emergencia, nunca recuperó su autoridad por completo y fue finalmente depuesto. El nuevo presidente electo estaba determinado a no seguir el mismo camino en su segundo gobierno y, consecuentemente, intentó marginar al Ejército al confiar a la Policía el combate al PCP-SL¹³

Lamentablemente para el presidente, la Policía estaba muy lejos de ser el tipo de fuerza descrita por Thompson como la mejor preparada para realizar operaciones antiguerrilleras. No tenían el entrenamiento, equipo ni sistema de inteligencia, ni la moral para realizar esa tarea. Por lo tanto, el PCP-SL estaba más capacitado y era mejor estrategia que la Guardia Civil y los *sinchus*, situación que permitió a las unidades guerrilleras enraizarse profundamente en Ayacucho y sus alrededores. Al tener los pies puestos más firmemente en la tierra que el gobierno, la primera fase de la guerra civil había sido ganada por el PCP-SL.

EXPANDIENDO LA «GUERRA POPULAR PROLONGADA», 1983-1992

Frente a la expansión de la insurgencia, el 27 de diciembre de 1992 Belaúnde se vio obligado a llamar a las Fuerzas Armadas para combatir y derrotar al PCP-SL. Esto dio inicio a la segunda etapa de la guerra civil, que duró desde 1983 hasta la captura de Abimael Guzmán en setiembre de 1992.

12 GORRITI, G. *Sendero. Historia de la guerra mulenaria en el Perú* ob. cit. pp. 77-93.

13 TAYLOR, L. *Maoism in the Andes. Sendero Luminoso and the Contemporary Guerrilla Movement in Peru* ob. cit., p. 33; KRUIJT, D. *Entre Sendero y los militares. Seguridad y relaciones cívico militares 1950-1991*. Lima: Editorial Robles, 1991. pp. 107-108.

Luego de llegar a Ayacucho, militares y marinos, que encontraron trabas ante la ausencia de un adecuado aparato de inteligencia, se embarcaron en una campaña de «tierra arrasada» con el objetivo de imponer a la población la idea de que el Estado era más fuerte que los insurgentes y, por lo tanto, sería más prudente para ellos apoyar a los militares. De la misma manera, a través de la estrategia de «mejor terminar con el terror que tener un terror interminable», los generales tenían la esperanza de escurrir el agua para poder eliminar al pez. El predecible resultado fue una serie de masacres bien documentadas, tal como lo percibió el ex ministro de Guerra, general Luis Cisneros Vizquerra, en una famosa (infame) entrevista

«Las Fuerzas Policiales no saben donde estan los senderistas ni cuantos son, no saben cuando van a atacar. Para que las Fuerzas Policiales puedan tener éxito tendrían que comenzar a matar a senderistas y no senderistas, porque esa es la única forma como podrían asegurarse el éxito. Matan sesenta personas y a lo mejor ahí hay tres senderistas y seguramente la Policía dirá que los sesenta eran senderistas.»¹⁴

Varios años después, Cisneros reafirmó el punto en términos más gráficos cuando declaró

«Si para matar a dos o tres senderistas es necesario matar a ochenta inocentes, no importa el campesino tiene que elegir donde quiere morir si con Sendero o con las Fuerzas Armadas.»¹⁵

Este punto de vista representaba la posición de una facción del alto mando militar. Otros sostenían que un planteamiento diferente sería más productivo, pero la falta de datos precisos de inteligencia sobre los cuadros del PCP-SL, junto al temor y sospechas con los que veían a otros peruanos con quienes diferían en términos de idioma, origen étnico y cultura, llevaron a muchos jefes militares en Ayacucho y departamentos vecinos a buscar una solución rápida y a cometer crímenes indiscriminados.¹⁶ Efectivamente, tal opción fue inconscientemente estimulada por Belaúnde cuando, al ordenar a los militares ir a Ayacucho, otorgó a las tropas un periodo de sesenta días para erradicar a los llamados «abigeos»

Cuando se analizó estos avances en relación a los argumentos de Thompson, saltaron una serie de elementos. Primero, Thompson sostenía que la difundida violación de los derechos humanos no sólo es moralmente equivocada, sino también contraproducente, porque aleja a parte de la población y la impulsa a apoyar a la guerrilla

14 Ver la entrevista con Cisneros en GONZALEZ Raul «Ayacucho, la espera del Gaucho» *Quehacer* n° 20 Lima DESCO, 1983, p. 50

15 Citado en GRANADOS, Manuel «El PCP Sendero Luminoso. Aproximaciones a su ideología» *Socialismo y Participación* n° 37 Lima CEDEP, 1987, pp. 27 y 33. Tomar en cuenta que los campesinos no tenían la opción de vivir

16 Esto está excelentemente retratado en la película de Francisco Lombardi *La boca del lobo*

Efectivamente, esto ocurrió en la sierra peruana en gran parte de 1980, cuando los militares eran vistos por muchos campesinos como un ejército invasor, mientras que al PCP-SL se lo consideraba el «equipo local», tal como se observó en la gran concurrencia al funeral de Edith Lagos. Diversos comentaristas señalaron que gran parte de la población serrana «temía» a la guerrilla del PCP-SL, pero «odiaba» a los soldados, una sutil distinción con importantes ramificaciones políticas y militares¹⁷

La falta de control judicial y político sobre las Fuerzas Armadas estimuló tales actitudes, lo que significó que el personal militar no respetaba la ley —no se veía que se hiciera justicia, como Thompson recomendaba, ya que a los tribunales llegaba un ínfimo porcentaje de casos documentados de oficiales que violaban los derechos humanos¹⁸. Tampoco había un buen ejemplo en los más altos niveles políticos: el presidente Belaúnde, temeroso de distanciarse de los generales, al parecer tiró a la basura un informe de Amnistía Internacional, y la administración de Alan García, a pesar de un intento inicial de mejorar la situación luego de la masacre de las prisiones en junio de 1986, fue responsable de crecientes niveles de violencia estatal.

En efecto, en julio de 1991 se filtró un documento, elaborado por los jefes de Estado Mayor, que confirmó lo que muchos observadores sospechaban: las Fuerzas Armadas habían estado aplicando una política de «disparar a matar». El resultado fue, empleando terminología de Thompson, una falta de «respeto» hacia el Estado que no era capaz de «cumplir sus obligaciones contractuales con el pueblo». Esta falta de autoridad moral se unió a la creciente corrupción entre una significativa minoría de las mal llamadas fuerzas «de la ley y el orden», desde un simple policía de tránsito hasta altos oficiales de la Marina acusados de negociar armamento militar. La consecuente actitud ambivalente con la que sectores de la población veían a los militares y a los diferentes sectores del Estado, obstaculizó la campaña antiguerrillera, debido a que ciudadanos que conocían a miembros del PCP-SL decidieron no dar información sobre ellos a las autoridades.

Además del error de las Fuerzas Armadas de no operar dentro de la ley, otro de los «cinco principios básicos de Thompson» de la lucha antiguerrillera que el Estado peruano violó durante los ochenta fue la necesidad de mantener un país «políticamente y económicamente estable y viable», y echar a andar una «razonablemente eficiente maquinaria gubernamental». Vistos

17 El impacto negativo de los asesinatos indiscriminados fue difundido regularmente por la prensa. Las consecuencias de la masacre de Soccos, por ejemplo, fueron expuestas así: «La despiadada acción de las Fuerzas Policiales no va a acabar con el terrorismo. Por lo contrario, va a incrementar las huestes de Sendero con los sobrevivientes de sus masacres. Los únicos países que han podido acabar con el terrorismo son aquellos que han actuado dentro de la ley» (*Oiga* n° 151, 28 de noviembre de 1983, p. 17).

18 Sobre los primeros intentos de sancionar los abusos contra los derechos humanos, ver GORRITI, G. *Sendero: Historia de la guerra milenaria en el Perú*, ob. cit., pp. 250-252.

como un todo, los gobiernos de Belaúnde (1980-85) y García (1985-90) se caracterizaron por un mal manejo económico los niveles de vida de la población cayeron rápidamente y la corrupción se expandió entre los funcionarios estatales y la clase política, a lo que se sumó un grado de caos socioeconómico jamás visto en el Perú desde la Guerra del Pacífico¹⁹

La situación de la administración de «justicia» fue particularmente simbólica en julio de 1984, de 3 500 personas acusadas de terrorismo sólo 300 habían sido procesadas y quince sentenciadas. Los casos estaban arreglados, colapsaron los juicios abiertos con base en confesiones extraídas con tortura, mientras que en otros los jueces (la mayoría de los cuales no estaban calificados para conducir casos de terrorismo) fueron sobornados o intimidados para garantizar indultos a través de la «falta de evidencia». Un indicador del caos fue el caso de Laura Zambrano («camarada Meche»), absuelta en dos oportunidades (en setiembre de 1984 y en febrero de 1988), pese a que era un cuadro clave de la organización del PCP-SL en Lima.

Tales sucesos no ayudaron a fortalecer la moral dentro de las fuerzas de la «ley y el orden», y estimularon operativos para poner en práctica la «justicia» por propia mano²⁰. Mientras tanto, la situación dentro de las prisiones sólo podía ser descrita como anárquica.

Representantes de todos los sectores del espectro político lamentaron este estado de «desgobierno» y advirtieron sobre la «beirutización» del país. La crisis económica, la falta de un liderazgo político efectivo, junto a la llamada «descomposición social», no sólo actuaron para socavar la autoridad del Estado, sino que también aseguraron un flujo permanente de adhesiones al PCP-SL.

Estas circunstancias generaron el ambiente propicio para una casi continua expansión de la actividad guerrillera en diez años (1983-92). La expansión fue también posible porque el PCP-SL había elaborado una respuesta viable, y fue capaz de resistir los asaltos que acompañaron a la primera incursión de las Fuerzas Armadas en Ayacucho. Cuando en 1983 los militares saturaron la zona, las fuerzas guerrilleras se retiraron de las áreas con mayor concentración militar, reagrupándose al noroeste y al este del departamento, pero dejaron su estructura política intacta, lo que les permitió ex-

19 CRABTREE, J. *Peru under Garcia an Opportunity Lost* Basingstoke Macmillan 1992, GRAHAM, C. *Peru s APRA Parties Politics and the Elusive Quest for Democracy* Boulder Lynne Rienner, 1992.

20 Tribunales especiales encabezados por jueces especialmente capacitados para dirigir casos de terrorismo se crearon apenas en 1987. Otras medidas consideradas por Thompson como componentes importantes del paquete contrainsurgente no fueron implementadas hasta que la guerra civil estaba en marcha: por ejemplo, solo en febrero de 1988 aparecieron anuncios ofreciendo recompensas por información, una ley de amnistía se discutió en el Congreso en 1987, pero no fue sino hasta 1992 que se aprobó la ley que garantizaba sentencias reducidas a quienes se «arrepintieran» y colaboraran con los servicios de inteligencia (DL 25499). Simultáneamente, se crearon tribunales militares especiales conformados por jueces sin rostro.

pandirse en forma gradual otra vez, tanto numéricamente como en términos de acciones realizadas. Se abrieron nuevos teatros de conflicto entre 1983 y 1988. Cusco y Puno al sur, el valle del Alto Huallaga y otras partes de la ceja de selva, Junín y otros departamentos de la sierra central, así como Cajabamba-Huamachuco y Ancash en la sierra norte. Creció el poder organizativo del PCP-SL en Lima, lo que se reflejó en una campaña concertada de atentados dinamiteros, asesinatos y apagones. Junto con el repunte de sus actividades en Lima, se reforzaron los intentos por consolidar la presencia guerrillera en los valles de Chancay y Cañete, localizados al norte y sur de la capital respectivamente, como parte de la estrategia de rodear y matar de hambre a las ciudades.

Estos avances significaron que mientras en 1981 seis provincias habían sido declaradas bajo estado de emergencia, en diciembre de 1989 esa cifra había crecido a cincuenta y seis. El número de efectivos militares y policiales asesinados en 1988 y 1989 fue el más elevado desde que se iniciara el conflicto en 1980. Para 1991, el PCP-SL era activo en veintiuno de los veinticuatro departamentos del Perú.

Tan rápida expansión durante los ochenta no sólo se debió al deterioro de las condiciones políticas, económicas y sociales que favoreció a los insurgentes, sino que también fue consecuencia de la incapacidad de las autoridades políticas y militares para poner en práctica dos de las medidas propuestas por Thompson: (i) la necesidad de coordinar efectivamente las políticas de desarrollo económico y social para apoyar los esfuerzos contrainsurgentes, y, (ii) establecer una unidad de inteligencia unificada y eficiente capaz de asumir la tarea prioritaria de infiltrar la estructura política subversiva. La ausencia de una política estatal coherente de inversiones y desarrollo para los departamentos de Ayacucho y Apurímac se puso en evidencia en agosto de 1984, cuando el entonces comandante militar de la zona de emergencia, general Adrián Huamán, manifestó públicamente su descontento acerca del descuido del gobierno de Belaúnde para proporcionar fondos a la zona, indiscreción que le costó el cargo²¹. Pero el gobierno

21. Sobre esto, ver las entrevistas con el general Huamán en *Oiga* n° 168 (26 de marzo de 1984), pp. 12-13, *La República* 26 de agosto de 1984, y *Caretas* n° 815 (3 de setiembre de 1984), pp. 14-16. En una serie de declaraciones hechas luego de su destitución, Huamán enfatizó firmemente las dimensiones socioeconómicas y políticas del conflicto sobre las militares. Por ejemplo, en mayo de 1990 manifestó: «hay definitivamente una violencia estructural y en este momento el sistema ya no funciona», por lo que era necesaria una drástica reorganización de la estructura social del Perú y sus instituciones. Además, opino: «cualquier acción que se haga en el campo militar no va a curar las causas. La represión no cura las causas de la violencia. Que vamos a lograr reprimiendo a la gente que protesta por la inmoralidad, la injusticia. Es gente frustrada, y eso no se puede curar con un fusil». Él sentía que debido a los problemas económicos por los que atravesaba el Perú y a las antiguas desigualdades sociales y étnicas, «no deberían haber una o dos entidades que están usando las armas, ¡deberían haber cien!» (ver *Página Libre* Suplemento Especial, 20 de mayo de 1990 pp. B5-6).

de García tampoco lo hizo mejor a pesar de la retórica sobre la necesidad urgente de desarrollar el «trapecio andino», no se hizo nada significativo para mejorar la situación de los campesinos entre 1985 y 1990

En relación al asunto de la infiltración, durante casi toda la década de los ochenta pareció que el PCP-SL era más experto en penetrar a las fuerzas de seguridad que viceversa²² El aparato político insurgente probó ser bastante flexible en este aspecto entre 1980 y 1990 sólo dos dirigentes (es decir, miembros del comité central) habían sido capturados –Antonio Díaz Martínez (diciembre de 1993) y Osmán Morote (junio de 1988)–, y cuando tan importantes cuadros cayeron en manos oficiales, pareció ser más por una casualidad que por intención. Además, su detención no socavó la eficiencia operativa de la organización insurgente²³

De hecho, a mediados y fines de los ochenta la ineficiencia de los servicios de inteligencia, evidente durante la primera fase de la insurrección, mostró pocas señales de mejoramiento. Las numerosas unidades antiterroristas ubicadas en diferentes secciones de las Fuerzas Armadas y Policiales continuaron funcionando de manera descoordinada y operaban dentro de una cultura burocrática que estimulaba las rivalidades interinstitucionales a tal punto que se desataban altercados hasta en plena vía pública. Esto entorpeció gravemente los esfuerzos para infiltrar y desmantelar la estructura de células del PCP-SL. Entre 1985 y 1990, el éxito del gobierno se basó principalmente en la detención de personas vinculadas a las numerosas organizaciones de apoyo (como Socorro Popular, Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas, entre otros), ubicados en la periferia del aparato partidario, además de militantes de base. La principal excepción fue la cap-

22 La situación fue resumida el 5 de mayo de 1986, cuando el vicealmirante Carlos Alberto Ponce fue asesinado por un escuadrón de aniquilamiento del PCP-SL. Ponce era miembro de un (supuestamente ultrasecreto) comando especial establecido por las Fuerzas Armadas para diseñar una estrategia para infiltrar la organización subversiva. Según una fuente su muerte «demuestra que Sendero está informado al detalle de los movimientos de los principales oficiales de nuestras Fuerzas Armadas sobre todo de aquellos involucrados en labores de inteligencia, y que su servicio de informaciones funciona más eficazmente que el de las fuerzas encargadas de combatirlo» (*Oiga* n° 279, 12 de mayo de 1986, pp. 21-3). Se sugirió que en 1985 había solo tres informantes infiltrados en el PCP-SL.

23 Cuando Díaz Martínez fue detenido por la Guardia Civil por tener documentos falsos durante una revisión de rutina a un omnibus en el departamento de Ancash el 16 de diciembre de 1983 inicialmente la Policía no sabía quien había caído en sus manos (ver *Caretas* n° 780, 20 de diciembre de 1983, pp. 12-13). El 11 de junio de 1988 Morote fue capturado cuando la Policía irrumpió en una casa a solo dos cuadras del inapropiadamente llamado Palacio de Justicia en el centro de Lima. Unas pocas horas antes un taxista informó a la Policía que había escuchado una conversación en la que uno de los pasajeros dijo «Tengo en casa uno que vale 3 mil soles» (la recompensa por la captura de Morote). La Policía entró «a ciegas» en la casa, y sus captores desconocían su identidad hasta que fue llevado ante el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (DINCOTE) (Ver *Quehacer* n° 53, 1988, pp. 20-1. *Caretas* n° 1362, 11 de mayo de 1995, p. 78). Corrió el rumor de que Morote había sido «vendido» por Abimael Guzmán luego de un desacuerdo sobre estrategia.

tura de importantes cuadros que operaban en Lima y otras áreas urbanas. Elementos claves de la organización instalados en zonas rurales sobrevivieron casi intactos, al igual que la dirigencia²⁴

Por su parte, las Fuerzas Armadas peruanas mostraron ser sorprendentemente ineficientes para contener la insurrección del PCP-SL en los Andes, y la trayectoria de la guerra civil a partir de 1982 comprueba varios de los argumentos de Thompson relacionados a los problemas que enfrenta un Ejército conformado principalmente por conscriptos cuando se involucra en una campaña contrainsurgente. Entrenamiento inadecuado, falta de moral y de disciplina que afectaban a algunas unidades que, sumados a la falta de datos de inteligencia sobre el PCP-SL, provocaron el asesinato indiscriminado de civiles. Cuando Alan García intentó hacer frente al asunto, el alto mando le advirtió que no interfiriera en la reducción del nivel de operaciones²⁵

Patrullas del Ejército (que usualmente funcionaban sólo de día y utilizaban como escudos a campesinos locales), en momentos degeneraron en actividades como saqueos sistemáticos, con los soldados aprovechándose

24 Esta situación fue bien resumida por Marcial Rubio quien señaló «Uno de los problemas principales que el Perú afronta desde que se inició el alzamiento en armas de Sendero Luminoso, es que mientras este muestra tener un equipo de inteligencia pensante que toma en cuenta los datos de la realidad para planificar sus operativos y el rumbo de su lucha demencial, el Estado carece de ello. La batalla de la inteligencia (entre otras) la viene ganando Sendero Luminoso y por amplísimo margen. La responsabilidad fundamental está en el gobierno (tanto el populista como el apриста). En estos ocho años no han hecho otra cosa que descansar en una estrategia represiva combinada con mecanismos de espionaje que no han llegado al corazón de Sendero pese al tiempo transcurrido. Se ha insistido hasta el cansancio en la necesidad de una estrategia contrasubversiva alternativa, pero ni el gobierno de Belaunde ni el de Alan García parecen haber tenido la mejor idea de como puede llevarse a cabo» (*Quehacer* n° 52, 1989, p. 40). Según Vladimiro Montesinos «mientras los gobiernos peruanos de los ochenta «jugaban por decir ‘damas’, Sendero Luminoso jugaba ‘ajedrez» este símil nos permite apreciar entonces, cuán abismal era la distancia que existía en el manejo de la guerra por el Estado, de un lado, y por la subversión, del otro, y explica también, como es que los grupos terroristas tuvieron en todo momento la iniciativa y desarrollaron el ritmo de la guerra irregular, según su conveniencia» (*Expreso* Suplemento Especial, 7 de junio de 1994, p. 18).

25 Las primeras sentencias por abusos contra los derechos humanos se dictaron en julio de 1985, cuando once policías fueron encarcelados por la muerte de treinta y cuatro campesinos de la localidad de Soccos. En setiembre de ese año, varios altos oficiales fueron destituidos por «excesos» similares, mientras que las relaciones del gobierno del APRA con los militares se deterioraron aun más a consecuencia de la masacre de los penales en junio de 1986. Según una fuente, en respuesta «En muchos casos se negaron a realizar operaciones que podían resultar políticamente delicadas exigiendo órdenes escritas para llevarlas a cabo. Muchas unidades se limitaron a darle seguridad a sus bases, dejándole la iniciativa en el campo a Sendero y al MRTA. Se llegó inclusive al exceso de que puestos policiales fueron arrasados por Sendero a pocos kilómetros de bases militares que no reaccionaban» (ver *Quehacer* n° 72, 1991, p. 49). Un oficial *sunchi* admitió que los militares habían reducido sus operativos y que estaban «aparentando» (ver *Oiga* n° 247 30 de setiembre de 1985, pp. 13-14). Sobre como este repliegue facilitó la masacre de campesinos de la localidad de Cochas a manos del PCP-SL (Ayacucho), ver *Caretas* n° 923 (29 de setiembre de 1986), pp. 45-46.

de la tierra, apropiándose de las posesiones de los campesinos, matando a los que protestaban y violando mujeres²⁶

La efectividad operativa también se vio entorpecida por los frecuentes cambios de personal. Éstos raramente se efectuaban con un criterio de eficiencia, haciendo menos probable el establecimiento de algún tipo de armonía con los civiles, asimismo, ello debilitó los intentos de mejoramiento del flujo de información de inteligencia acerca del PCP-SL. Además, la práctica de reemplazar regularmente a los oficiales destacados en zonas de emergencia significaba que «veteranos subversivos experimentados se enfrentaban siempre a militares bisonños»²⁷

Debido a las difíciles condiciones de vida, la presión constante y los bajos sueldos, muchos oficiales y la mayoría de los conscriptos temían, comprensiblemente, ser enviados a Ayacucho y otros lugares distantes (a los que eran enviados por castigo o, en el caso de los oficiales, cuando no lograban ascender o por alguna disputa burocrática), y su única preocupación era salir vivos al término de su servicio. En consecuencia, secciones de las Fuerzas Armadas y la Policía fueron apartadas de la fuerza «agresivamente» disciplinada que recomendaba Thompson, y en ocasiones las unidades locales se instalaban cerca a dependencias del EGP durante fines de los ochenta y comienzos de los noventa, en varias localidades ayacuchanas la guerrilla bajaba de las montañas en día de mercado para hacer sus compras semanales, luego de lo cual jugaban partidos de fútbol con los soldados²⁸. También ocurrieron episodios de corrupción, particularmente entre el personal acantonado cerca de las áreas de cultivo de coca en la ceja de selva²⁹

26 Para un inquietante recuento de asesinatos, violaciones y pillaje perpetrados por una patrulla que saqueaba todo lo que estuviera en su camino en la zonas rurales de Ayacucho ver *Quehacer* n° 72 1991. Otro informe de un testigo presencial señaló «Cuando (los *sinchus*) llegaron a Cotarusí violaron a casi todas las muchachas, forzaron a las mujeres y ancianos a lavarles la ropa sin pago alguno, forzaron las puertas de los bares que no les querían dar licor gratis y causaron gran desorden en todo el pueblo. Se pasaban las noches pegando tiros al aire y gritando bravuconadas. Cuando se fueron respiramos aliviados» (*Orga* n° 270 1° de marzo de 1986, p. 27). Debido a la crisis económica, a fines de los ochenta las tropas acantonadas en el valle del Huallaga y otros lugares no recibían sus raciones, y se les daba menos de un dólar diario en efectivo para comprar sus provisiones cuando estuvieran patrullando. Por lo tanto, se aprovecharon de la tierra lo que resintió las relaciones entre civiles y militares (ver *Caretas* n° 1052, 10 de abril de 1989, p. 39).

27 *Quehacer* n° 72, 1991 p. 47. Por lo general, oficiales del Ejército destacados en Ayacucho y otras zonas de emergencia eran transferidos cada seis meses, los infantes de Marina cada dos meses.

28 Comunicación personal de un ayacuchano bien informado y confiable (Lima, julio de 1993). Otro observador menciona que los líderes de la comunidad de Huancasangos «(le) dijeron que un teniente que había estado a cargo del cuartel unos pocos años antes habitualmente bebía con un maestro senderista y había estado borracho durante un ataque de Sendero» (*The New Yorker* 4 de enero de 1988 p. 42).

29 En un caso muy publicitado un destacamento antiterrorista de la Policía Nacional estacionado en Bellavista, en el valle del Huallaga, se acostumbró a detener vehículos en la carretera y las avionetas que utilizaban el aeropuerto local y a pedirles un «cupó» antes de

Debido a la falta de abastecimiento, y en muchos casos rodeados de una población civil sospechosa, era comprensible el sentimiento de desmoralización que cundió entre las tropas. Tal sentimiento podía prosperar porque lo experimentaban las tropas que trataban de cumplir una difícil tarea en medio de un vacío político, situación que fue captada con exactitud por un oficial del Ejército destacado en Tingo María, de acuerdo con la siguiente cita tomada en noviembre de 1988

«¿Que podemos hacer aquí? El poder económico lo tienen ellos, por su alianza con el narcotráfico. Inclusive pueden darle a la población lo que esta pida. Sendero protege los cultivos y el comercio de droga, con eso pueden pagar lo que deseen y tienen comprada a la población. Además, si alguien se resistiera moriría. En cada emboscada, el apoyo poblacional esta a favor de Sendero (los soldados) están en permanente tensión, tensión que los senderistas no tienen, pues son los que emboscan y desaparecen. Mira todos esos carros esperan repuestos desde hace meses y además no tenemos combustible. Creo que si no estamos ganando esta guerra, mas bien retrocedemos y no sé, realmente, que papel se quiere que juguemos aquí.»³⁰

Este tipo de declaraciones pesimistas de la situación militar, junto con las severas críticas a los gobiernos de Belaúnde y García por su manejo de la guerra civil, fueron difundidas por la prensa y voceadas por políticos de oposición durante toda la década de los ochenta. La insatisfacción fue tan extendida que hasta los parlamentarios oficialistas criticaban públicamente a su propio partido, como fue el caso del diputado del APRA por Ayacucho, Alberto Valencia, quien en enero de 1986 admitió que luego de seis meses en el gobierno, el APRA todavía no había formulado una política para combatir la insurgencia, punto que reiteró tres años después, en diciembre de 1988

«Es muy doloroso decirlo, pero nuestro Ejército se esta replegando. Hay carencia de material de combate. Actualmente sólo hay tres helicópteros y uno de ellos es tan viejo que no puede elevarse más allá de veinticinco metros. Lo fundamental es que no contamos con una estrategia antisubversiva. Cada sector hace lo que puede y a veces lo que quiere.»³¹

permitirles continuar con su viaje. El 9 de julio de 1991 luego de gastar parte de lo que habían ganado bebiendo en un bar ubicado al final del camino, las tropas decidieron detener un vuelo de itinerario de Aerochasqui, al que no se le iba a permitir despegar si no pagaba su «cuota». Corriendo por la pista de aterrizaje, dispararon contra el avión, hiriendo a los dos pilotos y varios pasajeros. El avión se estrelló dos kilómetros mas adelante, dejando diecisiete muertos, entre ellos el hermano del senador Tomás González, quien obviamente utilizó su cargo para demandar al gobierno para que tomara cartas en el asunto (*Si* n° 230 14 de julio de 1991, pp 78-83, *Caretas* n° 1168, 15 de julio de 1991, pp 14-15, 88-89)

30 Ver *Caretas* n° 1034 (28 de noviembre de 1988), p 39

31 Ver las entrevistas con Valencia en *Oiga* n° 264 (27 de enero de 1986), p 16, *Caretas* n° 908 (9 de junio de 1986), p 310, y *Caretas* n° 1037 (19 de diciembre de 1988) p 78. La falta de equipo también fue señalada en un anterior informe que estableció que la

Tal como Valencia lo puntualizó, más importante que la falta de helicópteros y otros recursos, el error de las autoridades políticas y militares en los ochenta fue no diseñar una estrategia contrainsurgente coherente

En ningún lugar se hizo más evidente la falta de claridad en la formulación de objetivos precisos y de planificación detallada que en el torpe intento de establecer aldeas entre 1983 y 1984. En 1982, extensas áreas de Huanta (Ayacucho) estaban bajo influencia del PCP-SL, y luego de «peinar» la zona como maniobra inicial de la operación «limpiar y ocupar», a fines de 1983 los infantes de marina estacionados en la provincia empezaron a establecer aldeas estratégicas, la comunidad de Pampacancha fue una de las primeras en ser seleccionadas. Un destacamento de doce infantes de marina permaneció en la localidad, se formó una unidad de defensa civil y en febrero de 1984 los marinos consideraron que Pampacancha estaba lo suficientemente bien organizada como para permitir a los militares trasladarse y entrenar otra comunidad³²

En vista de las importantes implicaciones simbólicas, políticas y militares de este proyecto, unidades locales del PCP-SL respondieron rápidamente: atacaron Pampacancha, superaron con facilidad a la pobremente armada milicia campesina (cuyos miembros eran conocidos como ronderos o montoneros), mataron a quince miembros de la unidad de defensa civil, incendiaron varias viviendas y advirtieron a los pampacanchinos que repetirían una acción más dura si continuaban colaborando con las Fuerzas Armadas. Los pampacanchinos pidieron, entonces, protección militar, que fue proporcionada por la Marina, la que procedió a instalar una aldea estratégica al obligar a cinco comunidades vecinas a empacar sus pertenencias y

Policia de Investigaciones de Huanta solo tenia dos vehiculos uno de los cuales estaba inoperativo porque no tenia llantas. Las patrullas que se trasladaban por las zonas rurales no tenian contacto por radio con su base y durante los anteriores cuatro meses las tropas no habian recibido sus bonos debido a que estaban en zona de emergencia (ver *Caretas* n° 1034 28 de noviembre de 1988 p 25). Por su parte, el respetado general (r) Sinesio Jarama critico la «improvisacion» y el «alto grado de irresponsabilidad en el manejo del proceso antsubversivo» (*Caretas* 3 de abril de 1989, pp 16-19). Esta declaracion fue confirmada por el jefe de operaciones de la DINCOTE, coronel Javier Palacios, quien en una conferencia confidencial en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) en setiembre de 1988, se quejo de que «no se ha armado a ningun organismo que pueda enfrentar» la organizacion del PCP-SL en Lima y sus alrededores. Manifestó «Todos trabajamos por nuestra cuenta. Cada uno hace su guerra, cada uno hace su lucha como lo cree conveniente, con su optica, como mejor le parece! Porque no existe un patron, no hay un lineamiento, no tenemos metas ni objetivos a alcanzar». Habia escasez de buenos datos de inteligencia. Una grabacion de la conferencia fue filtrada a la prensa y aparecio en *La Republica* (19 de marzo de 1989 pp 13-15).

32 Para mayores detalles sobre los sucesos mencionados en este parrafo, ver GONZALEZ, R. «Ayacucho. El desfile de la violencia» *Quehacer* n° 33. Lima: DESCO, 1985, pp 34-47, y GOLDENBERG, S. «Los montoneros de Huanta» *Debate* n° 28. Lima: Apoyo S.A., 1984. Ver tambien *Caretas* n° 815 (3 de setiembre de 1984), pp 19-20, y *Caretas* n° 817 (17 de setiembre de 1984) pp 24 y 70.

trasladarse a Pampacancha Debido a la larga historia de disputas de tierras no resueltas, las profundas rivalidades entre las comunidades y la incertidumbre sobre cómo se ganarían el pan y protegerían sus posesiones, la directiva militar provocó resentimientos y una resistencia pasiva, que los activistas clandestinos del PCP-SL que operaban en las localidades podían explotar para ganar nuevos adeptos En consecuencia, luego de un segundo retiro de los marinos en abril de 1984, los insurgentes enrolaron alrededor de trescientos campesinos para atacar y aplastar Pampacancha, y en el camino asesinaron a cuarenta hombres y mujeres pertenecientes a familias bastante identificadas con los militares Luego de esta masacre, los marinos retornaron y acompañaron a la restante milicia de pampacanchinos, incursionaron en las localidades vecinas buscando senderistas, robaron provisiones y cometieron numerosos abusos Los comuneros se sintieron profundamente resentidos por tales acciones y abandonaron sus comunidades, algunos se unieron a los insurgentes

Similares problemas surgieron a raíz de los intentos de establecer aldeas y unidades de defensa civil en otras zonas de Ayacucho y los departamentos vecinos, con el resultado de que aunque en diciembre de 1984 los militares afirmaron que sus esfuerzos habían logrado la organización de 90% de la población rural reinstalada en la zona de emergencia, en 1987 aproximadamente 80% de las aldeas estaban inoperativas³³

Cuando se analizan estos sucesos en relación a los argumentos de Thompson, es evidente que las Fuerzas Armadas peruanas cometieron muchos de los errores perpetrados en Vietnam las aldeas se establecieron al azar, sin tomar demasiado en cuenta las largas disputas entre comunidades, ocurrió una considerable interrupción de las actividades agrícolas de los campesinos, mientras que el suministro de alimentos por el gobierno y la ayuda para el desarrollo estuvieron ausentes gran parte del tiempo, las unidades de defensa civil recibieron inadecuada protección militar y los cuadros del PCP-SL pudieron operar dentro de las aldeas, logrando debilitar a muchas unidades de defensa

Considerando la trayectoria de los avances socioeconómicos, políticos y militares en los ochenta, es difícil evitar concluir que las acciones de las autoridades civiles y militares peruanas estaban muy lejos de lo descrito por Thompson como necesario para desarrollar una exitosa campaña contrainsurgente A través de una mejor organización y con más experiencia en tener «los pies en la tierra en el momento preciso y en el lugar correcto», el PCP-SL fue capaz de tener la iniciativa durante la segunda fase de la gue-

33 Sobre los problemas con los grupos de autodefensa civil, ver *Caretas* n° 944 (2 de marzo de 1987) pp 25-26, *Caretas* n° 946 (16 de marzo de 1987), pp 35-36, *Caretas* n° 979 (2 de noviembre de 1987) pp 29-30, *Caretas* n° 980 (9 de noviembre de 1987), p 72, *Caretas* n° 997 (14 de marzo de 1988), p 21, *Caretas* n° 1003 (25 de abril de 1988), pp 18-19 y 76, *Caretas* n° 1032 (14 de noviembre de 1988), p 46, *Caretas* n° 1033 (21 de noviembre de 1988) p 24 y *Caretas* n° 1052 (10 de abril de 1989), pp 37-41

rra civil y logró avances significativos. A principios de los ochenta la insurgencia pareció expandirse al mismo ritmo, mientras que la respuesta del Estado era tan inadecuada que por primera vez observadores informados enmudecieron ante la posibilidad de que el PCP-SL pudiera emerger victorioso del conflicto³⁴

La realidad, empero, era algo diferente, para el PCP-SL, los primeros años de los noventa fueron un periodo de aparente victoria y derrota disimulada. ¿Por qué?

RETROCESO DE LA «GUERRA POPULAR PROLONGADA», 1992-1996

A pesar de presentar una imagen de imparable, de diseñar planes que fueron implementados metódicamente, después de 1988 el PCP-SL enfrentó crecientes problemas que debilitaron sus actividades en el campo y en la ciudad. En una serie de localidades altoandinas (particularmente en Ayacucho y sus alrededores), una gran proporción de la población rural abandonó sus hogares, con el resultado de que el río empezó a secarse, exponiendo al pez cada vez más. Para complicar las cosas, el PCP-SL experimentó una erosión fatal de su base social conformada por los campesinos que decidieron no migrar, acontecimiento en gran parte estimulado por la visión cerrada y chata de los maoístas sobre la sociedad rural andina. Luego de apoyar inicialmente las sanciones contra los funcionarios corruptos, los abigeos, comerciantes deshonestos y pequeños terratenientes que habían prosperado gracias a la reforma agraria de Velasco, muchos campesinos (según Guzmán, «la fuerza motriz» de la revolución) empezaron a alejarse y luego a rebelarse contra los insurgentes³⁵

Los intentos del PCP-SL de imponer una «economía natural» a los campesinos, como parte de la estrategia de rodear y matar de hambre a las ciudades, amenazó la reproducción de numerosas economías de sobrevivencia y estimuló la oposición hacia las demandas del EGP de suministro de alimentos y de reclutas. También se estimuló el sentimiento antiguerrillero por la destitución arbitraria de las tradicionales autoridades comunales y su reemplazo por cuadros jóvenes del PCP-SL, que eran poco respetados por

34 Por ejemplo, el general Huamán fue más allá al señalar « estamos perdiendo en todos los frentes» (ver *Página Libre* Suplemento Especial, 20 de mayo de 1990, p B5)

35 ISBELL, B J «Shining Path and Peasant Responses in Rural Ayacucho», ob cit , pp 71-76, BERG, R «Peasant Responses to Shining Path in Andahuaylas», ob cit , pp 90-101, STARN, O «Maoism in the Andes: The Communist Party of Peru-Shining Path and the Refusal of History», ob cit , pp 411 y 415, CORONEL, J «Violencia política y respuestas campesinas en Huanta», en C I Degregori, editor *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* Lima Instituto de Estudios Peruanos, 1996, pp 29-116, DEGREGORI, C I «Cosechando tempestades: Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso en Ayacucho» en C I Degregori, editor *Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso* Lima Instituto de Estudios Peruanos, 1996 pp 189-225

los campesinos y actuaban invariablemente de manera autoritaria. La hostilidad existente también se generó por la extrema violencia que el PCP-SL empleó para imponer su política de «batir el campo» aunque los campesinos podían estar de acuerdo en que los explotadores y delincuentes merecían ser castigados, en la mayoría de los casos repudiaron la práctica de los senderistas de sancionar asesinando. El involucramiento de los rebeldes en asesinatos en masa comparables sólo con la brutalidad militar también fue rechazado por la mayoría de los campesinos y el PCP-SL perdió un gran apoyo.

Un miembro arrepentido, capturado, señaló correctamente «¿Cómo van a triunfar con matanzas de gente campesina? Así sólo se ganan el odio»³⁶

Además, mientras la guerra civil se expandía en los ochenta, un creciente número de campesinos se percataron de que el conflicto seguía un inexorable patrón que amenazaba su propia existencia: la incursión del PCP-SL en una nueva área traía algunos beneficios iniciales, pero derivaba en el cierre de escuelas y postas médicas, en la llegada de las Fuerzas Armadas y en una significativa escalada de violencia con los civiles atrapados en medio de un fuego cruzado y siendo blanco de las balas de ambas partes.

Para evitar esta rutinaria escena, la respuesta racional era evitar que el PCP-SL operara en determinado distrito. Los campesinos, entonces, empezaron a actuar en contra de los insurgentes en un gran número de localidades, formando sus propios grupos de autodefensa (rondas campesinas). Uno de los primeros en conformarse fue el del valle del río Apurímac, una zona de ceja de selva en la provincia de La Mar (departamento de Ayacucho), donde, en agosto de 1989, cuarenta y ocho comunidades se unieron para defenderse de las columnas del PCP-SL. Primero, estos «ronderos» emplearon sus propios recursos para armarse lo mejor que podían. Comprensiblemente, los militares eran reacios a entregarles armas, pero una vez que su utilidad fue apreciada por las autoridades, empezaron a recibir armas ligeras del Estado. En diciembre de 1989, por ejemplo, cuando el número de localidades de esta parte del valle del río Apurímac llegó a ochenta y cinco, el presidente Alan García fue en persona a presentar a los ronderos con doscientos fusiles de caza, darles dinero en efectivo y dos tractores³⁷.

Entre 1990 y 1991 las noticias del éxito de las rondas en esta región se expandieron rápidamente por toda la sierra a través del «telégrafo cholo», e

36 Citado en *Caretas* n° 1000 (4 de abril de 1988) p. 4. Sobre el asunto de «castigar pero no matar», ver NACLA «Fatal Attraction: Peru's Shining Path» *NACLA Report on the Americas* 24 (4), 1990, p. 14.

37 *Caretas* n° 1056 (8 de mayo de 1989), pp. 35-37; *Caretas* n° 1057 (15 de mayo de 1989), pp. 36-39; *Caretas* n° 1070 (14 de agosto de 1989), pp. 30-31; *Caretas* n° 1081 (7 de noviembre de 1989), pp. 33-50 y 80; *Caretas* n° 1087 (11 de diciembre de 1989) pp. 24 y 37. Para mayores detalles sobre el desarrollo inicial de los comités de defensa civil del río Apurímac, ver *Caretas* n° 1010 (13 de junio de 1988) pp. 40-41. Posteriormente uno de los autoproclamados líderes de estas rondas, «Comandante Huayhuaco», fue sentenciado por narcotráfico.

inspiraron la creación de similares «comités de defensa civil» en zonas tan diversas como Huanta, Huancavelica y Puno. Se dice que en el estratégicamente importante valle del río Mantaro, en setiembre de 1990, 105 comunidades campesinas conformaron una organización similar³⁸. Muchos campesinos que se habían enrolado voluntariamente o habían sido reclutados por el PCP-SL se desilusionaron, desertaron y se integraron a los «montoneros».

Estos hechos representaron un importante revés para el PCP-SL, y obligaron a los insurgentes a estar a la defensiva, lo que provocó que actuaran con mayor brutalidad al tratar de destruir las «rondas», una respuesta que generó un adicional antagonismo con la llamada «fuerza motriz» de la revolución.

Las dificultades que enfrentaban los cuadros del PCP-SL en las zonas rurales también se sumaron a una mejora del desempeño de ciertos comandantes innovadores en escenarios claves de combate, quienes evitaron la estrategia directa de disparar a matar. En el valle del Alto Huallaga (zona de producción de coca, base de numerosos destacamentos del EGP e importante fuente de recursos para la organización rebelde), el nombramiento en 1989 del general Alberto Arciniega como jefe militar significó la implementación de una campaña por ganar «los corazones y las mentes» de los pequeños productores de coca y reducir su apoyo al PCP-SL. Con este objetivo, Arciniega sancionó a las tropas que robaban a la población civil, castigó los abusos contra los derechos humanos y, tal como recomendó Thompson, trató de actuar dentro de la ley. El general también se negó a considerar a los coccaleros como delincuentes, prometió a los productores que sus cultivos no serían rociados con *Spike* y les ofreció intentar conseguir ayuda para financiar la sustitución de cultivos y otros programas de desarrollo. Se hicieron esfuerzos para mejorar la moral entre las tropas fomentando el acercamiento entre oficiales y soldados, esto último para las patrullas de vanguardia que compartían las mismas raciones que sus subordinados. Las medidas tuvieron cierto grado de éxito: se incrementó la colaboración entre civiles y militares y el Ejército fue capaz de golpear seriamente a los insurgentes³⁹.

38 Si n° 188 (23 de setiembre de 1990), pp. 16-17 y 96. Para mayores detalles sobre tendencias similares en partes de Ayacucho ver STARN O «Sendero, soldados y ronderos en el Mantaro», ob. cit. Por lo general no se cedía ni una cuarta en los enfrentamientos entre ronderos y las columnas del PCP-SL. El 1° de marzo de 1990 alrededor de doscientos campesinos de las comunidades de Comas y Cochabambas (ubicadas al noroeste de Huancayo) capturaron a nueve guerrilleros en una emboscada. Fueron decapitados y sus cabezas llevadas ante las autoridades (*El Comercio* 3 de marzo de 1990, p. A10).

39 A pesar de ser eficiente, Arciniega fue destituido de su puesto en 1990 debido a presiones de la DEA, que se oponía a su política de no reprimir a los coccaleros. Para mayores detalles, ver *Caretas* n° 1066 (7 de julio de 1989), pp. 27-31, Si n° 128 (14 de agosto de 1989), pp. 20-21 y 92, GONZALEZ, R. «El Huallaga. Todos los conflictos» *Quehacer* n° 71 Lima DESCO, 1991, pp. 46-52, CRABTREE, J. *Peru under Garcia: an Opportunity Lost* ob. cit. pp. 207-208, y POOLE, D. y G. RENIQUE *Peru: Time of Fear* Londres Latin American Bureau, 1992, pp. 185-189.

El departamento de Junín, en la sierra central, fue otra zona donde una propuesta más astuta rindió frutos. Hacia fines de los ochenta el PCP-SL tenía una importante presencia en determinadas zonas rurales, la región fue declarada zona de emergencia en octubre de 1988 y en los años siguientes tanto la guerrilla como el Ejército estuvieron comprometidos en hechos sanguinarios. En esta coyuntura, el PCP-SL perdió parte de su base campesina, debido a una serie de sucesos que se asemejaban a los ya vistos en partes de Ayacucho y Apurímac, aunque algunos comandantes se percataron de las graves limitaciones que tenía una estrategia basada únicamente en la represión. En consecuencia, las unidades militares estacionadas en el departamento de Junín en 1991 comenzaron a cambiar de táctica, cometiendo menos abusos contra los derechos humanos, además de proporcionar alguna ayuda militar y económica a las comunidades en las que se habían organizado «rondas» autónomas para enfrentar al PCP-SL. Simultáneamente, se impulsó a otras localidades para establecer milicias y colaborar con el programa de «acción cívica» de los militares.

Como resultado de estas medidas, para 1992 la actividad senderista en la región del Mantaro se había reducido significativamente. La situación tuvo un curso similar en la región selvática de Oxapampa (departamento de Cerro de Pasco), donde los nativos asháninkas se levantaron contra el PCP-SL.

A comienzos de los noventa la posición del PCP-SL se complicó en los grandes conos urbanos de las ciudades, particularmente Lima. Su intento de captar adeptos entre los trabajadores organizados no tuvo éxito, debido a la oposición de los activistas pertenecientes a organizaciones izquierdistas rivales. Según Thompson, la creación de una organización de inteligencia efectiva «es de vital importancia» si un Estado quiere combatir la insurgencia con éxito, aparato que idealmente debe pertenecer a la fuerza policial. Decisiones significativas en ese sentido se tomaron en marzo de 1990, cuando se creó el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) como una unidad de inteligencia de elite dentro de la Policía Nacional. Sus actividades tuvieron un impacto crucial en el curso de la guerra civil. Conformado por profesionales que rechazaban la práctica común en la DINCOTE de detener en redadas a numerosos «sospechosos» y luego extorsionarlos, esta dependencia fue de gran utilidad en el mejoramiento de la capacidad del Estado para golpear la estructura política del PCP-SL, lo que para Thompson es un objetivo clave.

Luego de la creación del GEIN, los niveles de detección en Lima mejoraron, sus operativos registraron significativos descubrimientos en junio de 1990, cuando una incursión en una casa en la capital produjo varios arrestos y la incautación de una importante parte del archivo central del PCP-SL, incluyendo el celebrado vídeo de «Zorba el Griego» que probaba que Abimael Guzmán estaba vivo. A este éxito le siguió la captura de Guzmán y de varios miembros claves de la dirigencia en setiembre de 1992, como resultado de una impecable operación encubierta.

La captura de Guzmán y otros cuadros de alto nivel (tales como Germán Siprián, coordinador nacional del PCP-SL), significó un golpe masivo

para el PCP-SL. Mientras que en los ochenta la mística desarrollada entre los cuadros alrededor de la figura del «Presidente Gonzalo» y el «Pensamiento Gonzalo» ayudó a crear un alto grado de cohesión partidaria, la disciplina y un espíritu de combate superior al de las fuerzas de la «ley y el orden», el culto a la personalidad mostró por último ser el talón de Aquiles de la organización rebelde. La detención de Guzmán melló la moral senderista y debilitó su creencia en una próxima victoria —la consigna «Presidente Gonzalo Garantía de triunfo» ahora sonaba hueca—. Tales sentimientos se fortalecieron por la inteligente parodia de presentar ante la prensa a un Guzmán enjaulado y gordo (vestido con un risible uniforme a rayas) y permitiéndole pronunciar un discurso incoherente.

Además del impacto psicológico que significó la caída de Guzmán y la humillación pública, el GEIN también logró incautar una serie de documentos y discos de computadora que contenían varios miles de nombres, lo que permitió a los servicios de inteligencia dismantelar una parte significativa de la estructura alta y media del PCP-SL. De esta manera, luego de 1992 el Estado peruano ganó la vital guerra de la inteligencia⁴⁰

Este abismal viraje en los acontecimientos políticos se debió en parte a que la «cúpula senderista» cayó en una trampa que Thompson consideró debía ser evitada a toda costa —excesiva confianza en sí mismo y subestimar al enemigo—. Si la premisa de que ganaba el sector «que tenía los pies en la tierra en el momento preciso y en el lugar correcto» era acertada, entonces a comienzos de los noventa se percibieron señales de que el PCP-SL había comenzado a crear su propia propaganda, sobreestimando su poderío a la vez que asumía que continuaría la inepta respuesta contrainsurgente del Estado.

Un primer indicio de esto ocurrió en mayo de 1988, cuando el mando político del PCP-SL en el norte chico, Isidoro Nunja, fue arrestado luego de un ataque a la cooperativa azucarera y frutícola de Andahuasi, ubicada en Huaura, en la costa norte de Lima. En sus manifestaciones, Nunja aseguró que los senderistas creían que el colapso del Estado peruano ocurriría en unos dos o tres años, era la primera desviación notable de la línea oficial, pues según esta última la «guerra popular prolongada» iba a durar varias décadas⁴¹.

40 Sobre avances en la sierra central, ver los excelentes artículos de Manrique («Sierra central. La batalla decisiva» *Quehacer* n° 60 Lima DESCO, 1989, pp 63-71) y Starn («Sendero, soldados y ronderos en el Mantaro», *ob cit*). Para mayores detalles sobre los ashaninkas, ver *Caretas* n° 1182 (21 de octubre de 1991) pp 36-40.

41 Según Agustín Mantilla, ministro del Interior del gobierno aprista durante la última parte de la administración de Alan García, a mediados de los noventa se hicieron energícos esfuerzos para persuadir al asesor de seguridad del presidente electo Fujimori Vladimiro Montesinos, de que el GEIN no debía ser desactivado. Sin embargo entre 1994 y 1995 la organización fue fragmentada y redujo sus operativos de 82 a 30 —como resultado de celos burocráticos y luchas internas (ver *Caretas* n° 1353 9 de marzo de 1995, pp 88-9 y 96 y *Caretas* n° 1362, 11 de mayo de 1995 p 88).

En mayo de 1991 aparecieron mayores evidencias de que el PCP-SL tenía un audaz —aunque atolondrado— punto de vista de sus probabilidades y estaba adelantando su cronograma original para implementar la «guerra popular prolongada», cuando, a través de su órgano de difusión (*El Diario*), el comité central anunció que la organización había avanzado de una situación de «defensa estratégica» (la primera fase del esquema militar del PCP-SL) y estaba ingresando en un periodo de «equilibrio estratégico» con el Estado peruano y sus Fuerzas Armadas. Esta decisión (parte de un plan estratégico aprobado en 1989) se basó en una evaluación de que los insurgentes estaban en proceso de lograr una posición de paridad política y militar con el Estado: el «viejo orden» se estaba desmoronando, mientras el PCP-SL avanzaba y tomaba la iniciativa política y militar, la actividad guerrillera en el campo no podría ser erradicada, las «zonas liberadas» se expandirían, lo mismo que el control sobre las personas y los recursos. Como resultado, los órganos de dirección del partido en las zonas rurales se estaban fortaleciendo, junto con las tropas del EGP, que estaban avanzando desde una posición donde el ejército rebelde podía integrar más contingentes y comprometer a las fuerzas gubernamentales en enfrentamientos de tipo convencional a mayor escala y más abiertos. El balance político y militar era que comenzaría una «guerra de movimientos», que eventualmente anunciaría la «ofensiva estratégica» del conflicto, llevando al colapso del Estado y a la toma del poder por la subversión.

Aunque el pronóstico del desempeño del Estado peruano pareció razonable dadas las circunstancias sociopolíticas de principios de 1991, la declaración del comité central no evaluó correctamente y desapasionadamente la verdadera fuerza del partido en términos de poderío y capacidad ofensiva, o los profundos problemas que estaba enfrentando en el campo y la ciudad. Fuera del valle del Huallaga el EGP tenía una clara desventaja militar, y aunque el apoyo al PCP-SL había crecido durante los ochenta, tal como ya se señaló, luego de permanecer indecisos importantes contingentes del campesinado andino endurecieron su posición hacia los insurgentes aun cuando seguían sospechando del Estado.

En un esfuerzo por obligar a que ocurrieran los sucesos para que la realidad se adecuara a la declaración del comité central, el PCP-SL intensificó el conflicto bajo condiciones en las que expuso aún más a sus cuadros a la muerte o a la captura, haciendo más vulnerable la organización a la infiltración, particularmente en Lima. Al abandonar su propuesta tradicionalmente reservada —o como Thompson lo diría, perder la «paciencia» y dejar de tener «los pies en la tierra»—, el PCP-SL hizo una significativa contribución a revertir su fortuna en el periodo posterior a 1992. En consecuencia, el Estado peruano ganó claramente la tercera fase de la guerra civil, a tal punto que en 1996 el PCP-SL, a pesar de continuar operativo, ya no representaba «una opción de poder», como parecía ser en 1992.

CONCLUSIONES

A partir del análisis hecho hasta aquí, se puede apreciar que la respuesta de las autoridades civiles y militares peruanas a la insurrección desatada por el PCP-SL fue durante mucho tiempo inefectiva. El gobierno de Belaúnde, a través de su mal manejo de la economía, corrupción, incapacidad para formular y poner en práctica planes de desarrollo coherentes, junto con la falta de respeto por los derechos humanos, violó todos los prerrequisitos socio-políticos que Thompson señaló como esenciales para la implementación de una política contrainsurgente viable. Aunque muchos miembros del gobierno de García que asumió en 1985 comprendían la seriedad de la amenaza que significaba el PCP-SL y eran conscientes de las raíces socioeconómicas de la revuelta, así como de la inmoralidad e ineficacia del terrorismo de Estado, el APRA en el poder no tenía esa visión, unidad de propósitos o la capacidad administrativa para mejorar las cosas.

En parte a través de un buen gobierno y también gracias a la buena suerte, desde 1990 el régimen de Fujimori logró mejorar de largo el desempeño de sus predecesores y cumplió de alguna manera con el primer requisito de Thompson para enfrentar a la insurrección. Fujimori restituyó la esperanza entre muchos peruanos de que su país podía ser «política y económicamente estable y viable», también encabezó una «maquinaria gubernamental razonablemente eficiente», sobre todo si se la compara con el caos de los ochenta. Además, Fujimori fue capaz de cumplir el tercer «principio básico» de Thompson para librar una campaña contrainsurgente: aunque no existía un detallado plan de desarrollo, Fujimori (principalmente por motivos electorales) fue más que eficiente al entregar pequeños proyectos a la comunidad, lo que estimuló el apoyo popular a su gobierno. Luego del desastre de los ochenta, en los noventa se vio una marcada mejoría en relación al cuarto prerrequisito de Thompson para una efectiva contrainsurgencia: el establecer una organización de inteligencia capaz de penetrar la estructura política de los rebeldes.

En relación con la dimensión militar de la guerra civil, y aunque la formación en guerra de guerrillas ha sido durante largo tiempo un componente central del currículo del CAEM, sorprendió que las Fuerzas Armadas peruanas estuvieran tan mal preparadas y fueran poco efectivas para combatir al PCP-SL durante los ochenta.

Primero, Thompson subrayó la importancia de una planificación detallada, pero fue extremadamente difícil para los militares diseñar una estrategia contrainsurgente efectiva, tal como se demostró en los frecuentes cambios de política que acompañaban a la llegada de cada comandante de campo a Ayacucho y otros lugares.

Segundo, los sucesos ilustraban ampliamente la veracidad del argumento de Thompson de que conscriptos mal equipados y mal entrenados son inapropiados para librar una campaña contrainsurgente.

Tercero, en relación a los planteamientos de Thompson de que los militares deberían operar dentro de la ley, emplear «una hábil y sensata mezcla de simpatía e insensibilidad», muestra un «espíritu ofensivo» que debería, sin embargo, «ser tratado con discreción y nunca ser utilizado para justificar operaciones que son simplemente imprudentes o sencillamente estúpidas» (1966 146-147, 171) Por fortuna para el Estado peruano y sus Fuerzas Armadas, durante la segunda mitad de los ochenta el PCP-SL también dejó de actuar con «una hábil y sensata mezcla de simpatía e insensibilidad», por el contrario, la proclividad de los militares a realizar acciones sangrientas «imprudentes y sencillamente estúpidas» hizo más difícil contener a la insurgencia. Nuevamente, la administración de Fujimori tuvo la suerte de que a comienzos de los noventa una serie de comandantes innovadores acantonados en los distritos rurales estaban haciendo mayores esfuerzos para ganarse a la población.

Por último, se ha dicho recientemente que «Sendero continúa consolidando su posición en el interior del Perú», y que «lentamente está tomando el control de cada vez más territorio nacional»⁴² Esta evaluación es completamente equivocada desde 1992 el número e intensidad de las acciones del PCP-SL ha disminuido significativamente, en gran parte debido a la iniciativa y capacidad organizativa del campesinado andino. No sorprende, entonces, que esta contribución al cambio de rumbo de la guerra civil no haya sido totalmente reconocida por el Perú «oficial» (*Traducción Cecilia Remón*)

42 MANWARING, M «Peru's Sendero Luminoso The Shining Path Beckons», *ob cit*, pp 165-166, *Caretas* n° 1008 (30 de mayo de 1988), pp 31-32 Manwaring también establece que «líderes nacionales e internacionales observan discuten y se pelean mientras Sendero destruye más y más infraestructura, y erosiona poco a poco la estabilidad nacional e internacional» El PCP-SL nunca erosionó la estabilidad internacional, mientras que la afirmación de que «Sendero Luminoso es sin discusión la cosa más inspiradora que haya ocurrido en la izquierda» (1995 165-166), muestra una total falta de comprensión acerca de las idas y venidas de la política peruana durante la pasada década.